



JUZGADO TRECE LABORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

PROCESO: ORDINARIO LABORAL -OTROS ASUNTOS.

DEMANDANTE: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES.

DEMANDADO: HECTOR ENRIQUE DE LAS SALAS ARROYUELO.

RADICACIÓN: 08-001-31-05-013-2022-00375-00.

INFORME SECRETARIAL: Señor Juez, a su Despacho la presente demanda digital ordinaria informándole que por reparto de la Oficina Judicial correspondió a este Juzgado, la cual se encuentra radicada. Es de anotar que los términos judiciales estuvieron suspendidos por tres días hábiles correspondientes a los días 2, 3 y 4 de mayo de 2.023, así como los días 26, 27 y 28 de junio del presente año, con ocasión al cierre extraordinario ordenado con el Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico mediante los Acuerdos No CSJATA23-209 y 260 de 2023, y que también estuvieron suspendidos del 14 al 22 de septiembre de 2.023, con ocasión a lo ordenado por el Consejo Superior de la Judicatura mediante los Acuerdos PCSJA23-12089 del 13 de septiembre de 2023 y PCSJA23-12089/C3 del 20 de septiembre de 2.023. De igual forma, es de anotar que el Titular del Juzgado estuvo en labores de escrutinios del 29 de octubre al 4 de noviembre de 2.023. Así mismo, que la Secretaría del Juzgado, frente a la cual hubo cambio de secretario, está en labores de organización para el trámite de los procesos activos y depuración de archivos con ocasión a la restante digitalización del Juzgado frente expediente anteriores a este pendiente por tramitar, labores dentro de las cuales se encontró e identificó este proceso. Sírvese a proveer.

Barranquilla, 9 de febrero de 2.024.

MARIA B POTES SANTODOMINGO.
Secretaria.

JUZGADO TRECE LABORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA. Barranquilla, nueve (9) de febrero de dos mil veinticuatro (2.024).

Visto el informe secretarial que antecede y estudiada la demanda junto con sus anexos, observa el Despacho que la entidad demandante, ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES-COLPENSIONES, por medio de apoderado judicial, presenta demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del señor HECTOR ENRIQUE DE LAS SALAS ARROYUELO, y esboza como pretensión se declare la nulidad de la Resolución No. SUB 212680 del 29 de septiembre de 2.017, mediante la cual COLPENSIONES dio alcance a la Resolución No. 000580 del 30 de marzo de 1995, en cumplimiento al fallo judicial proferido por JUZGADO 14 LABORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA el 9 de octubre de 2012 y en consecuencia, se reconoció una pensión de vejez por alto riesgo y se reajustó la mesada pensional a favor del señor DE LAS SALAS ARROYUELO HECTOR ENRIQUE, de conformidad con las evidencias encontradas en la investigación administrativa especial 236-19, que a título de restablecimiento del derecho, se ordene al señor demandado, reintegrar a favor de Colpensiones la suma de mil doscientos cuarenta y siete millones novecientos cuarenta y nueve mil quinientos noventa y siete pesos m/cte. (\$1.247.949.597), de las sumas de dinero percibidas como mesadas, retroactivo y aportes en salud y/o fondo de solidaridad, percibidos de forma irregular con ocasión del reconocimiento de una pensión de vejez de alto riesgo, e igualmente se ordene la indexación de las sumas reconocidas a favor de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES, y al pago de intereses a los que hubiere lugar, la compensación de las sumas de dinero pagadas a la Demandada por concepto de mesadas derivadas de la pensión de sobrevivientes, con cualquier suma, que en el presente o futuro adeude, o deba cancelarle la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES - al Demandado, así como también se condene en costas a la parte demandada.

Frente a lo anterior, encuentra el Despacho que el asunto principal a resolver, es la nulidad de un acto administrativo de carácter particular, pretensión que conforme al sistema jurídico colombiano, solo es posible elevarla a través de un medio de control (nulidad simple o con restablecimiento del

Calle 40 NO. 44-39. Piso 4. Edificio Telecom.
Telefax: 3885156 / 3885005 EXT. 2030. www.ramajudicial.gov.co
Barranquilla – Atlántico. Colombia
Correo: lcto13ba@cendoj.ramajudicial.gov.co





JUZGADO TRECE LABORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

derecho) cuyo conocimiento y decisión se encuentra atribuido a la jurisdicción contenciosa administrativa y cuya competencia no es posible prorrogar para ninguna otra jurisdicción, pues solo a ella le corresponde dilucidar la verdadera existencia del principio de legalidad que rodea el acto administrativo demandado.

El artículo 2° del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, impera que:

“COMPETENCIA GENERAL. <Artículo modificado por el artículo 2 de la Ley 712 de 2001. El nuevo texto es el siguiente:> La Jurisdicción Ordinaria, en sus especialidades laboral y de seguridad social conoce de:

1. Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo.
2. Las acciones sobre fuero sindical, cualquiera sea la naturaleza de la relación laboral.
3. La suspensión, disolución, liquidación de sindicatos y la cancelación del registro sindical.
4. <Numeral modificado por el artículo 622 de la Ley 1564 de 2012. El nuevo texto es el siguiente:> Las controversias relativas a la prestación de los servicios de la seguridad social que se susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades administradoras o prestadoras, salvo los de responsabilidad médica y los relacionados con contratos.
5. La ejecución de obligaciones emanadas de la relación de trabajo y del sistema de seguridad social integral que no correspondan a otra autoridad.
6. Los conflictos jurídicos que se originan en el reconocimiento y pago de honorarios o remuneraciones por servicios personales de carácter privado, cualquiera que sea la relación que los motive.
7. La ejecución de las multas impuestas a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje, por incumplimiento de las cuotas establecidas sobre el número de aprendices, dictadas conforme al numeral 13 del artículo 13 de la Ley 119 de 1994.
8. El recurso de anulación de laudos arbitrales.
9. El recurso de revisión.
10. <Numeral adicionado por el artículo 3 de la Ley 1210 de 2008. El nuevo texto es el siguiente:> La calificación de la suspensión o paro colectivo del trabajo”.

Siendo estos, los asuntos cuya definición está atribuida por la Ley de manera general a la jurisdicción ordinaria, en sus especialidades laboral y de seguridad social, junto con otros regulados también en la Ley, en el CST y otros específicos y sumarios contemplados en ella, de lo cual se infiere que el legislador no atribuyó a esta jurisdicción el asunto que fue remitido por la Oficina Judicial, en donde se pretende la nulidad de un acto administrativo y el restablecimiento del derecho del demandante afectado, como en cambio sí lo dispone especialmente para la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo el artículo 97 del CPACA frente a la revocatoria de los actos administrativos de carácter particular y concreto, en los siguientes términos:

“Salvo las excepciones establecidas en la ley, cuando un acto administrativo, bien sea expreso o ficto, haya creado o modificado una situación jurídica de carácter particular y concreto o reconocido un derecho de igual categoría, no podrá ser revocado sin el consentimiento previo, expreso y escrito del respectivo titular.

Si el titular niega su consentimiento y la autoridad considera que el acto es contrario a la Constitución o a la ley, deberá demandarlo ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

Si la Administración considera que el acto ocurrió por medios ilegales o fraudulentos lo demandará sin acudir al procedimiento previo de conciliación y solicitará al Juez su suspensión provisional.

PARAGRAFO: En el trámite de la revocación directa se garantizarán los derechos de audiencia y defensa.” <Negrilla y subraya fuera de texto>.

Lo cual guarda también ilación con la cláusula general de competencia de la Jurisdicción de lo Contencioso estatuida en el artículo 104 del CPACA, así: “La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas o

Calle 40 NO. 44-39. Piso 4. Edificio Telecom.
Telefax: 3885156 / 3885005 EXT. 2030. www.ramajudicial.gov.co

Barranquilla – Atlántico. Colombia

Correo: lcto13ba@cendoj.ramajudicial.gov.co



No. SC5780 - 4



No. GP 059 - 4



JUZGADO TRECE LABORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

los particulares cuando ejerzan función administrativa,” no entrándose el presente caso dentro de las excepciones establecidas en el artículo 105 de esa normatividad por tratarse el presente asunto de la denominada “acción de lesividad” adelantada por la propia entidad pública, que encuadra a su vez en el artículo 138 ibidem, y no dentro del ámbito de la Jurisdicción Ordinaria Laboral junto a su compendio procesal.

Luego, la admisión de esta demanda no depende de la competencia por factor objetivo, territorial o por conexidad, sino de la verificación de la competencia de la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral, la cual se echa de menos; por lo que, con fundamento en el artículo 16 del CGP, aplicable por analogía en materia laboral en virtud del principio de integración normativa, admitir y dictar sentencia en la presente acción, constituiría un vicio procedimental que no es saneable en los términos de ese estatuto procesal y que el Juez puede e igualmente debe declarar de oficio.

Así, la Corte Constitucional ha señalado que para la determinación de la competencia se debe tener en cuenta el principio de legalidad y el debido proceso, reflejado en este asunto en el hecho de que las normas del CPACA, sumadas a precedentes, armonizados, del Consejo de Estado y del Consejo Superior de la Judicatura, este último en decisión de conflicto negativo de competencia, consideran que pretensiones de esta índole definen legalmente el conocimiento de tales asuntos en la Jurisdicción Contenciosa Administrativa; igualmente no puede dejarse a un lado el principio de imperatividad, esto es, su obligatoria observancia no susceptible de derogatoria ni desconocimiento por la voluntad de las partes o de los funcionarios; el principio de indelegabilidad, en cuanto a que la jurisdicción competente, no puede ceder ni delegar la competencia que detenta legalmente; y finalmente su carácter de orden público, fundamentado en principios y criterios que se relacionan con la prevalencia del interés general.

En sentencia SU-182 de 8 de mayo de 2019, M.P. Dra Diana Fajardo Rivera, en armonía con recientes pronunciamientos del H. Consejo de Estado, la Honorable Corte Constitucional, al unificar la jurisprudencia respecto a la revocatoria directa de pensiones, enseñó las siguientes pautas, dejando entrever cuál es la jurisdicción competente e incluso la clase de acción o medio de control que debe ejercerse.

El Alto Tribunal Constitucional enseñó en la citada sentencia que: *“sólo son dignos de protección aquellos derechos que han sido adquiridos con justo título; que la verificación oficiosa del cumplimiento de los requisitos pensionales es un deber para la entidad de seguridad social; que solo motivos reales, objetivos, trascendentes, y verificables, que pudieran enmarcarse en un comportamiento criminal justifican la revocatoria, sin el consentimiento del afectado; que no es necesario aportar una sentencia penal para desvirtuar la buena fe del beneficiario de la pensión ni tampoco hace falta que el afiliado sea el que haya concertado o inducido en error a la administración, pues el ordenamiento jurídico sanciona a quién se aprovecha de estos escenarios o del error ajeno; y que la revocatoria unilateral es un mecanismo de control excepcional promovido por la propia administración, que no resuelve definitivamente sobre la legalidad de un acto administrativo, ni tiene la competencia para expulsar del ordenamiento un acto pensional y retrotraer sus efectos; por lo que tanto la administración como los particulares deben acudir ante el juez competente para resolver de forma definitiva las diferencias que surjan en torno a un reconocimiento pensional”*.

Respecto al Juez competente y la clase de acción, en esa misma providencia dicha Corporación vislumbró que corresponde el conocimiento del asunto, a la jurisdicción contenciosa, a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, cuando sentenció que el nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo superó esta discusión entre el acto ficto y el expreso, que existía de cara a la acción de lesividad en el antiguo Código Contencioso; pero que también la nueva normatividad, consagra el principio de inmutabilidad de los actos, de manera más amplia y clara que en el antiguo Código, pues ya no reconoce de forma general la posibilidad de revocar unilateralmente actos contrarios a la Constitución o la Ley, **“sino que obliga a las autoridades a demandarlo ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo”**; que a partir del actual artículo 97 del CPACA, solo en casos excepcionales previstos legalmente, será

Calle 40 NO. 44-39. Piso 4. Edificio Telecom.
Telefax: 3885156 / 3885005 EXT. 2030. www.ramajudicial.gov.co
Barranquilla – Atlántico. Colombia
Correo: lcto13ba@cendoj.ramajudicial.gov.co





JUZGADO TRECE LABORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

posible revocar un acto sin el consentimiento del interesado. **“De lo contrario, las entidades tendrán que acudir a la acción de nulidad y restablecimiento del derecho (de lesividad) para demandar ante un juez administrativo su propio acto”**. (Negrilla y subraya fuera de texto original).

Añadió que una de las excepciones a la prohibición de revocatoria unilateral ocurre justamente en el marco del sistema pensional, conforme al artículo 19 de la Ley 797 de 2003, precepto legal que dispone:

“Revocatoria de pensiones reconocidas irregularmente. Los representantes legales de las instituciones de Seguridad Social o quienes respondan por el pago o hayan reconocido o reconozcan prestaciones económicas, deberán verificar de oficio el cumplimiento de los requisitos para la adquisición del derecho y la legalidad de los documentos que sirvieron de soporte para obtener el reconocimiento y pago de la suma o prestación fija o periódica a cargo del tesoro público, cuando quiera que exista motivos en razón de los cuales pueda suponer que se reconoció indebidamente una pensión o una prestación económica. En caso de comprobar el incumplimiento de los requisitos o que el reconocimiento se hizo con base en documentación falsa, debe el funcionario proceder a la revocatoria directa del acto administrativo aun sin el consentimiento del particular y compulsar copias a las autoridades competentes”.

No obstante, también aclaró que *“la naturaleza jurídica de la revocatoria directa implica que sus efectos solo aplican hacia el futuro (ex nunc). Es por ello que la administración no puede recuperar los dineros girados a través de este mecanismo, **sino que tendrá que acudir al juez administrativo, quién sí es competente para retrotraer todas las consecuencias que se derivaron de una actuación irregular, y decidir definitivamente sobre la nulidad de un acto administrativo**”*¹.

Al respecto, la Corte Constitucional en Auto 540 del 19 de agosto de 2021, M.P. Dra. Diana Fajardo Rivero, estudiando una situación similar a la que hoy nos ocupa, consideró:

“La competencia para conocer de la demanda de Colpensiones es de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. La Sala Plena ha establecido que cuando una entidad pública demanda, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, un acto administrativo propio tras no obtener la autorización del titular para revocarlo directamente, el asunto es competencia de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, incluso si el acto se pronuncia sobre derechos pensionales. La Corte ha llegado a esta conclusión con base en los artículos 97 y 104 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Según el primero de ellos, si el titular no autoriza a la administración de manera previa, expresa y escrita para revocar directamente un acto administrativo de carácter particular que lo afecta, “deberá demandarlo ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.” A su vez, según el Artículo 104 del mismo código, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo resuelve los conflictos jurídicos relacionados con “actos (...) sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas (...).” Según la Corte, tal competencia de los jueces administrativos cubre actos administrativos relativos a derechos pensionales, en la medida que la habilitación para que la administración demande un acto propio tiene como objetivo, entre otros, proteger el interés y el patrimonio público.

8. Así las cosas, en la medida que en el presente caso Colpensiones acude al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con el fin de demandar un acto administrativo propio que se pronuncia sobre derechos pensionales, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es la competente para conocer del proceso. Por lo tanto, esta Corporación resolverá el conflicto en el sentido de declarar que corresponde al Juzgado 49 Administrativo Oral del Circuito de Bogotá conocer de la demanda presentada por Colpensiones contra Alicia Isabel Hernández Cáceres. La Sala ordenará remitirle el expediente de la referencia a dicha autoridad judicial para lo de su competencia y para que comuniqué la presente decisión a los interesados.”

¹ “[E]l acto de revocación es una decisión administrativa que rige hacia el futuro. En esa medida, la recuperación de los dineros indebidamente pagados sólo es posible lograrlo por conducto del juez, que es el competente para definir bien el restablecimiento del derecho y/o la reparación del daño o éste solamente, según se trate de la acción contenciosa que sea precisa instaurar”. Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. CP: Ana Margarita Olaya Forero Sentencia del 16 de julio de 2002. Radicación número: 23001-23-31-000-1997-8732-02 (IJ 029).



JUZGADO TRECE LABORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

9. Regla de decisión. La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es la competente para conocer de una demanda de una entidad pública contra un acto administrativo propio, presentada en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho tras no obtener la autorización del titular para revocarlo directamente, incluso si el acto se pronuncia sobre derechos pensionales. (Subraya fuera de texto original).

Y en fecha más reciente, la aludida Corporación mediante Auto 317 del 9 de marzo de 2.022, M.P. Dra. Diana Fajardo Rivera, en un proceso de similares características, respecto de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho que adelantó una entidad pública contra un acto administrativo propio, dirimió un conflicto de jurisdicción suscitado entre este Juzgado y una Sala Unitaria del Tribunal Administrativo del Atlántico, declarando que era que dicho Tribunal el competente para conocer de la demanda promovida por COLPENSIONES, con fundamento a la citada regla de decisión recordando que “donde se evidencia el ejercicio de la denominada acción de lesividad, prevalece la competencia de la jurisdicción especial sobre la ordinaria y por tanto, la competencia corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativa.” Auto 316 de 2021. M.P. Cristina Pardo Schlesinger. SV. Diana Fajardo Rivera”

Así las cosas, teniendo en cuenta que lo que la parte demandante pretende es la nulidad de un acto administrativo y el restablecimiento de su derecho<acción de lesividad>, la jurisdicción competente es la contenciosa administrativa y no la ordinaria laboral, la cual conforme al artículo 2 del CPT y de la SS, expresamente conoce de los asuntos antes referidos y en ninguno de ellos, hace referencia a súplicas como las que aquí se pretenden decidir.

Con base en lo anterior, se impone rechazar la demanda por falta de jurisdicción, y se ordenará remitir el expediente a través de la oficina judicial respectiva a la Jurisdicción Contenciosa Administrativa por ser la competente para avocar el conocimiento de las pretensiones formuladas dentro del presente juicio, a fin que la demanda sea repartida entre los Jueces Administrativos del Circuito de Barranquilla, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 del C.G.P., aplicable por integración normativa en materia laboral por disposición del artículo 145 del C.P.T.S.S., en concordancia con lo señalado por la Corte Constitucional en la sentencia C-807 de 2009.

Por lo expuesto, el Juzgado,

RESUELVE:

PRIMERO: RECHAZAR la demanda por falta de jurisdicción. En consecuencia, se ORDENA remitir el expediente a la oficina judicial respectiva para que sea repartido entre los Juzgados Administrativos del Circuito de Barranquilla, para lo de su competencia, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 90 del C.G.P., aplicable por integración normativa en materia laboral por disposición del artículo 145 del C.P.T.S.S.-

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EL JUEZ,


JOSE IGNACIO GALVÁN PRADA
O-2022-00375

Juzgado 13 Laboral Del Circuito de Barranquilla
Día 13 Mes 02 Año 2024
Notificado por el Estado N° 024
La Providencia de fecha Día 09 Mes 02 Año 2024
La Secretaria María Bernarda Potes Santodomingo

